



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: SILVIA AMPARO CASTRILLÓN CARMONA
Demandados: COLPENSIONES y OTRO
Procedencia: JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 67
Radicado n.º: 05001-31-05-007-2021-00127-01 (O2-22-462)

En Medellín, a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad pública demandada, así como el grado jurisdiccional de consulta en su favor, dentro del proceso ordinario instaurado por **SILVIA AMPARO CASTRILLÓN CARMONA** en contra de **COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.**, con radicado n.º 05001-31-05-007-2021-00127-01 (O2-22-462).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

Mediante gestora judicial, **SILVIA AMPARO CASTRILLÓN CARMONA** pretende la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, la reactivación de la afiliación a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con el traslado de todos los valores que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, como cotizaciones, intereses, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora y rendimientos financieros, y el pago de las costas procesales, con sustento fáctico en que nació el 3 de enero de 1996 y se afilió al ISS para los seguros de IVM hasta que se trasladó al RAIS a

través de la AFP PROTECCIÓN S.A. en agosto de 1996; que al momento del traslado de régimen pensional, dicho fondo privado no le suministró información necesaria y debida respecto de las consecuencias del traslado, de sobre las características de cada régimen y la forma de causar la pensión de vejez en ellos, y que 2020 solicitó a COLPENSIONES el traslado de régimen pensional, mismo que fue denegado mediante comunicado del 18 de febrero de 2021.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 31 de mayo de 2021 (doc. 08), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

COLPENSIONES, luego de notificada (doc. 13), contestó la demanda el 14 de octubre de 2021 (doc. 14 y 17) a través de poderhabiente judicial, oponiéndose a las pretensiones formuladas por carecer de fundamentación fáctica y legal, al tiempo de formular las excepciones de mérito que nominó: inexistencia de la ineficacia en el traslado de régimen, indebida aplicación de las normas en materia de asesoría de traslado pensional, inversión de la carga dinámica de la prueba, errónea interpretación e indebida aplicación del artículo 1604 del C.C., desconocimiento del precedente judicial, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, devolución de la totalidad de los aportes debidamente indexados, buena fe, prescripción, compensación, e imposibilidad de condena en costas.

A su turno, PROTECCIÓN S.A. dio respuesta a la demanda a través de mandatario judicial el 21 de octubre de 2021 (docs. 20 y 30), oponiéndose a las pretensiones enarboladas al ser el traslado de régimen completamente válido, y sin que se demuestre ningún vicio del consentimiento. En su defensa, propuso las excepciones de mérito que rotuló: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP por inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver la prima de seguro previsional por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

1.2.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 4 de octubre de 2022 (docs. 29 y 30), oportunidad en la cual la cognoscente de instancia declaró la

ineficacia de la afiliación de la actora al RAIS, ordenando a la AFP trasladar a COLPENSIONES los montos existentes en la cuenta de ahorro individual con sus respectivos rendimientos financieros, así como lo descontado para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, a la vez de ordenar a COLPENSIONES a recibir dichos dineros y tener como afiliado al demandante sin solución de continuidad, gravando en costas a PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante.

1.3 APELACIÓN

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por el apoderado judicial de COLPENSIONES, en cuyo sustento sostuvo que debe ordenarse a la AFP el traslado del 100% de las cotizaciones, sin descuento alguno y con cargo a su patrimonio, esto es, que debe devolver, adicional a los recursos del FGPM, las cuotas de administración y los pagos por seguros previsionales, en razón a que la ineficacia es inoponible a su representada por ser un tercero de buena fe, y en atención al principio de sostenibilidad financiera, por lo que no debe asumir las consecuencias de la declaratoria de ineficacia.

1.4. CONSULTA

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada fue adversa a los intereses de la entidad pública demandada, se revisará integralmente a su favor la sentencia de instancia en el grado jurisdiccional de consulta, conforme lo dispone el artículo 69 del CPT y de la SS.

1.5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad legal para alegar de conclusión, a través de poderhabiente judicial, COLPENSIONES solicitó que se adicione la sentencia de primera instancia, en lo concerniente a ordenar a la AFP PROTECCION a trasladar a COLPENSIONES el valor del 100% del aporte realizado por la demandante, esto es, que a más de los aportes, rendimientos y el valor del descuento al fondo de pensión de garantía mínima, también traslade todos los gastos de administración y los valores descontados por cuotas de seguros previsionales a que hubo lugar durante el tiempo en que la demandante ha estado afiliada a dicha administradora, sumas estas que deberán ser debidamente indexadas.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES,

advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, al igual que se estudiará integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la antedicha entidad pública, para lo cual se plantea para su estudio los siguientes:

2.1. PROBLEMAS JURÍDICOS:

El quid del asunto por resolver en la Litis se centra en definir: ¿Si operó la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional efectuado por el extremo litigioso por activa a la AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad convidada a juicio?, y de ser así, ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que devienen de la ineficacia del traslado y que deben ser objeto de reconocimiento?

2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** en cuanto a la declaración de ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional a la AFP demandada, siguiendo la tesis de que no se brindó la asesoría integral y cualificada que pregonaba el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, **adicionándolo** en cuanto a la integralidad de las consecuencias jurídicas que determina la devolución de las cotizaciones, esto es, que se debe incluir además del traslado de las sumas descontadas para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, las descontadas por seguros previsionales y por gastos o comisiones de administración y de manera indexada, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1 Ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS

En lo que interesa a la Litis, no es objeto de discusión los siguientes hechos: que la accionante se afilió al ISS, hoy COLPENSIONES, desde el 10 de agosto de 1989 (doc. 18); que no es beneficiaria del régimen de transición ni por edad (doc. 07 pág. 63), ni tiempo de servicios cotizados (doc. 18); que SILVIA AMPARO CASTRILLÓN CARMONA se afilió el **29 de agosto de 1996** a la AFP COLMENA, hoy PROTECCIÓN S.A. (doc. 21 pág. 89), luego de lo cual se afilió a la AFP PROTECCIÓN S.A. el 9 de abril de 2003 (doc. 21 pág. 91); y que el 15 de febrero de 2021 solicitó a COLPENSIONES la declaratoria de ineficacia de su afiliación al RAIS y su traslado de régimen pensional (doc. 07 pág. 92), mismo que fue denegado por la entidad pública mediante comunicado del mismo día (doc. 07 pág. 94).

Para resolver de fondo la Litis, sea lo primero señalar que este juzgador plural viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia de radicación n.º 31989 del 9 de septiembre de 2008 hasta la más reciente sentencia SL2229-2022, línea jurisprudencial en la que se haya el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; que la suscripción del formulario de afiliación es insuficiente para probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor de la afiliado como parte débil de la relación jurídica contractual, y que el alcance de la jurisprudencia laboral citada, permite aplicarla a todos los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiario del régimen de transición, o esté próximo o no a pensionarse.

En esa misma dirección, preciso es ponderar por la Sala que para la fecha del traslado de régimen pensional el 29 de agosto de 1996, la AFP accionada tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97 numeral 1º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que al decir de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL1217-2021, consiste en: *“ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (...) suministrar (...) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. (...) proporcionar (...) una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.”*

Conforme los anteriores basamentos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación inicial, se allegó el correspondiente formulario de afiliación (doc. 21 pág. 89), mismo que no fue desconocido ni tachado por la parte actora; empero, tal probanza no refleja que de manera documentada que se haya presentado la asesoría veraz y calificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, en tanto no basta con hacer alusión a los beneficios de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas de la afiliación al RAIS, mismas que

no fueron explicitadas de manera previa, o cuando menos, al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional.

A este respecto, estima pertinente la Sala señalar que si la AFP no cuenta con soporte documental para la fecha del traslado por cuanto la información se brindó únicamente de manera verbal, tal circunstancia denota la contravención delo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegarse un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos formales que pregona la Superintendencia Financiera, sino que se requiere de la efectiva e integral asesoría brindada al momento del traslado, indicando las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, con la advertencia de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima, debía efectuar aportes voluntarios superiores a las deducciones de ley por cotizaciones, en la medida en que no se trata solo de disuadir al afiliado con llamativos rendimientos financieros, sino que se le debe prestar asesoría en función de que pueda lograr en lo futuro la pensión que mejor se acompañe con sus expectativas y la densidad cotizacional alcanzada en toda su vida laboral.

Ahora, si bien el litigioso por activa de la relación procesal acepta en el interrogatorio que antes de su traslado tuvo una reunión con representantes de la AFP (min. 38:00) y que ella firmó personalmente el formulario de afiliación (min. 42:00), no puede soslayar la Sala que el deber de información únicamente se satisface con la evidencia de que la decisión de la afiliada fue verdaderamente libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, pues por el contrario, la accionante aclaró que información alguna brindada previamente a la afiliación fue superficial, fragmentaria, grupal (min. 38:20) y de corta duración (min. 39:00), afirmándosele principalmente que el ISS desaparecería (min. 38:25), es decir, sin expresarle todas las características puntuales y comparativas del RAIS y del RPMPD, y lo que es más importante, las posibles desventajas de su traslado al RAIS, y que se traducen en un hándicap para la afiliada.

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad en la que se hizo la afiliación y traslado de régimen pensional, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el asesor que atendió a la litigiosa por activa cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible al potencial afiliado, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues a contrario sensu, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, el traslado de régimen pensional no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y generalizadas efectuadas por la deprecante en

desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún, las referidas a la condición académica o nivel de instrucción de la reclamante (min. 36:50) ante un tema de alta complejidad para la afiliada como lo es el cálculo de una mesada pensional, a más de no ser censurable que la afiliada no haya realizado indagaciones por su cuenta de su situación pensional, en tanto el deber de brindar tal información corresponde con exclusividad por ministerio de la ley a la AFP y no al afiliado.

En lo concerniente a las re-asesorías para el traslado entre AFP del mismo régimen, esta Sala ha sido del criterio de que las mismas no convalidan la actuación viciada de traslado, por manera que aún bajo los supuestos de que la accionante hubiere recibido asesoría al momento de su segunda su afiliación dentro del RAIS el 9 de abril de 2003 (doc. 21 pág. 91) y todavía en el entendido que el 18 de febrero de 2021 le informaron los posibles montos de su mesada pensional en el RAIS y en el RPMPD (doc. 07 pág. 97 a 101) ; ello *per se* no tiene la virtualidad de subsanar o convalidar las falencias de información al momento del traslado de régimen pensional. A este respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: *“la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones: (...) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información”* (SL1688 de 2019).

De igual forma, en la misma providencia la Corte Suprema de Justicia analiza la excepción de saneamiento de la nulidad relativa, precisando que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del *status quo*, indicando que: *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Así las cosas, deberá confirmarse la decisión de instancia en este punto, en tanto con acierto declaró la ineficacia de la afiliación y el traslado de régimen pensional.

2.2.2. Traslado de las cotizaciones.

Sobre el particular, es del caso precisar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, en consonancia a lo pregonado por la jurisprudencia laboral del máximo tribunal de esta jurisdicción, en sentencias con radicados n.º 31898 de 2008, SL4989-2018 y SL1429-2019, y que COLPENSIONES tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que el hecho de que dicha entidad pueda tratarse de un tercero la imposibilite para recibir los aportes realizados, por la simple y llana razón de que este ente de seguridad social administra el régimen de prima media con prestación definida al que se encontraba afiliado antes del traslado.

En el anterior contexto, la Sala estima pertinente resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL2877-2020, en la que se recapitulan las implicaciones y consecuencias de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, de la cual conviene trasuntar los siguientes apartes:

“i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;

ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que la demandante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima.

iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por la promotora del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones.”

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado de pensiones devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima (Decreto 3995 de 2008 artículo 7, Sentencia SU-062 de 2010) y los

gastos de la aseguradora (primas previsionales), pues carecería de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP sin razón financiera atendible, pues a pesar de que tales descuentos tuvieron un origen legal y sirvieron en su momento a un propósito jurídicamente preestablecido como el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración financiera de las cotizaciones o el fortalecimiento de un fondo de garantía, aquellos nunca hubieran sido efectuados por la AFP de no haberse producido la afiliación y traslado de régimen pensional.

En paralelo, esta Sala considera que hay lugar al traslado de todas las cotizaciones y sus rendimientos a COLPENSIONES, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también la plena realización del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*. Por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no soslaya esta Sala la existencia de un pronunciamiento mediante circular sobre este aspecto por parte de la Superintendencia Financiera, es preciso indicar que el mismo se refiere a los traslados de régimen pensional por iniciativa propia, y que en últimas, tal acto no es de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales, allende que, la Sala se aviene a línea jurisprudencial que en derredor del tema ha venido desarrollando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como quedó dicho *in extenso* en líneas anteriores.

Así mismo, la devolución de los descuentos debe ordenarse de manera indexada, atendiendo a que si bien aquella no fue impetrada con la demanda, vale decir, no fue materia de debate en el presente proceso, debe procederse a su reconocimiento oficioso, en tanto que ello no se traduce en una condena sino que solo constituye el reconocimiento del efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo de las sumas descontadas de las cotizaciones por los rubros atrás descritos, prohijándose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente sentencia SL950-2022 emitida por la H. Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral.

Conforme a lo expuesto, deberá esta Corporación adicionar el fallo confutado venido en consulta y en apelación, en el sentido de ordenar también la devolución de lo descontado por comisiones de administración y pago de primas de seguros previsionales, a más de proceder a ello de manera indexada.

2.2.3 Excepción de prescripción

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, se memora que “a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria” (SL1465-2021), a más de que esta Sala ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, las consecuencias que trae la declaratoria de la ineficacia se traducen en el imperativo traslado de las aportaciones de manera íntegra, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele, según lo dicho por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, como en la sentencia SL361, radicación 63615 del 13 de febrero de 2019.

2.3. COSTAS

Sin costas de segunda instancia en contra de COLPENSIONES, en tanto la sentencia de instancia se analizó integralmente en su favor en virtud al grado jurisdiccional de consulta y que el recurso de alzada por esta propuesto tuvo visos de prosperidad.

Frente a las costas de primera instancia, habrán de confirmarse, en razón a que no fueron materia de apelación, atendiendo al alcance del principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S.

2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral TERCERO de la sentencia venida en apelación y consulta proferida el 4 de octubre de 2022 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el cual quedará en los siguientes términos:

*“**TERCERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A., a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de SILVIA AMPARO CASTRILLÓN CARMONA, esto es, las respectivas***

cotizaciones, rendimientos financieros y cualquier otra suma que obre en la misma; así como todos los descuentos que por comisiones de administración, por pago de primas de seguro previsional y por aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, haya efectuado sobre los aportes de la demandante mientras estuvo afiliado a dicha AFP, descuentos que deberán ser devueltos debidamente indexados, de conformidad con la parte motiva de este proveído.”

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera instancia se confirman.


Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador. Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen. Se declara terminado el presente acto y se firma por los que en el intervinieron. **Comuníquese, notifíquese y cúmplase.**



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



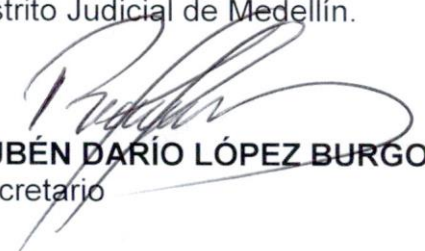
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario